



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA, EN EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU OTRORA CANDIDATO A GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN EL C. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/125/2021/NL Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/155/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/224/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/247/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/248/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/268/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/269/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/292/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/378/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/400/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/414/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/673/2021/NL E INE/Q-COF-UTF/910/2021/NL

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 36, numeral 1 y 39, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 13, numeral 1, fracción b), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presento **VOTO PARTICULAR**, respecto del punto 1.419 del orden del día de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante Consejo General del INE) celebrada el pasado 22 de julio de 2021, consistente en el Proyecto de Resolución del Consejo General del INE respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a gobernador de Nuevo León, el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario en el Estado de Nuevo León identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/125/2021/NL y sus Acumulados. En este sentido, me permito manifestar las razones por las que no comparto el sentido del proyecto, al tenor siguiente:

Decisión mayoritaria

En la Resolución aprobada por la mayoría de las y los Consejeros del Consejo General del INE, se determinó que la C. Mariana Rodríguez Cantú, en su calidad de influencer y de persona física con actividad empresarial, a través de sus perfiles de redes sociales (Instagram y Facebook), realizó aportaciones que beneficiaron a los denunciados, ello mediante diversas publicaciones que se consideran propaganda electoral y que las mismas fueron sistemáticas y reiteradas, así como por haber participado en el video denominado “Arráncate Nuevo León Rock”, sin haber recibido contraprestación alguna, por lo cual se determinó declarar fundado el procedimiento de mérito por la actualización de



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

aportaciones de ente prohibido e imponer las siguientes sanciones y cuantificarlas al tope de gasto de campaña:

- 1) En relación con las publicaciones hechas por la C. Mariana Rodríguez Cantú, en sus cuentas de Instagram y Facebook, se determinó imponer al Partido Movimiento Ciudadano una sanción consistente en \$55,151,879.14 (cincuenta y cinco millones ciento cincuenta y un mil ochocientos setenta y nueve pesos 14/100 M.N.).

De igual forma, se impuso al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda una sanción consistente en 5,000 Unidades de Medida y Actualización (en adelante UMA), misma que equivale a \$448,100.00 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil cien pesos 00/100 M.N.)

- 2) En relación con la aparición de la C. Mariana Rodríguez Cantú, en el video denominado "Arráncate Nuevo León Rock", se determinó imponer al Partido Movimiento Ciudadano multa consistente en \$119,028.00 (ciento diecinueve mil veintiocho pesos 00/100 M.N.).

De igual forma, se impuso al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, una sanción consistente en 10 UMA, misma que equivale a \$896.20 (ochocientos noventa y seis pesos 20/100 M.N.)

Motivos de disenso.

Una vez expuestas, de manera general, las determinaciones asumidas por la mayoría de las y los Consejeros del Consejo General del INE, de manera respetuosa, me permito exponer las razones por las cuales me aparto de la Resolución aprobada.

1) Aportaciones de ente prohibido susceptibles de no sanción.

El motivo de mi disenso con la Resolución en mención, radica en que si bien se surte la hipótesis normativa prevista en los artículos 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP), así como en el artículo 121, numeral 1, inciso j) del Reglamento de Fiscalización (en adelante RF), lo cierto es que, en el presente caso, se dejó de analizar y valorar un aspecto medular que resulta de gran relevancia, y es el relativo al vínculo jurídico que prevalece entre el denunciado entonces candidato y la C. Mariana Rodríguez Cantú, lo cual desde mi perspectiva, constituye una excepción a dicha prohibición.

Así, es de señalar que es un hecho público y notorio que el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda y la C. Mariana Rodríguez Cantú, al día de la fecha mantienen una relación de pareja al estar unidos por la figura jurídica del matrimonio, misma que de conformidad con



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

el Código Civil Federal presupone, entre otras cosas, igualdad y ayuda mutua a lo largo de sus vidas, y que en el presente caso se traduce en un apoyo natural y esperado a su cónyuge al encontrarse en un proyecto político que resulta de gran trascendencia para sus vidas, como lo es el caso que nos ocupa, situación que debió valorarse ampliamente en el proyecto, situación que no aconteció así.

Ahora bien, resulta de vital importancia recordar que, en el derecho administrativo sancionador son aplicables los principios derecho penal, ya que en ambas ramas del derecho existe una similitud fundamental con la imposición de las penas, como una reacción ante conductas típicamente antijurídicas, y que derivan de la potestad punitiva del Estado, ello de conformidad con la jurisprudencia de rubro: DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.

En este contexto, considero que el caso que hoy nos ocupa está relacionado con lo que la doctrina del derecho penal denomina ***inexigibilidad penal individual***, esto es, que dicha figura representa una excluyente de responsabilidad del delito que da lugar a que la conducta, aunque prohibida por la ley, se considere comprensible, entendible, explicable y, por ello, disculpable. Dentro de esta figura se encuentra, precisamente, la excusa absolutoria que contienen la mayoría de los códigos penales respecto al tipo penal de encubrimiento entre personas que guardan alguna relación de parentesco.

Cabe mencionar que a la figura se le denomina *inexigibilidad penal individual*, justamente porque la conducta apegada a la norma es exigible a la generalidad de la población que no se encuentre en esas situaciones individuales.

Así pues, en el caso concreto, estimo que en el derecho sancionador electoral no podríamos exigirle a la C. Mariana Rodríguez Cantú una conducta diversa a la desplegada, precisamente porque se encontraba en esta situación particular -de matrimonio- con el otrora candidato, por lo que era esperable y comprensible que, durante el periodo de campaña, actuara de forma tal que sus actividades se volcaran en apoyo a la candidatura de su cónyuge; otra conducta no era esperable.

Además, es preciso señalar que la Sala Superior del TEPJF (en adelante Sala Superior) en el año 2018 determinó mediante la sentencia recaída al expediente SUP-REC-887/2018, que las manifestaciones de apoyo que en ese entonces difundió en redes sociales la C. Mariana Rodríguez Cantú, en apoyo a la campaña de su pareja sentimental, no constituyeron propaganda electoral, sino que se trató de un ejercicio genuino del derecho a la libertad de expresión, por lo anterior, y al encontrarnos ante un caso idéntico, considero



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

que esta autoridad se debe ceñir a las consideraciones y resolutivos contenidos en la sentencia SUP-REC-887/2018.

En suma, reitero que por las razones tan particulares que revisten al presente caso, considero que se actualiza la causal excluyente de responsabilidad que he mencionado y que la misma debiera tomarse en consideración a efecto de no imponer sanción alguna por los hechos que son materia de análisis, ya que insisto, por la existencia de un vínculo jurídico -de unión- entre dichas personas, no era esperable otra conducta tanto del denunciado como de la C. Mariana Rodríguez Cantú, más que la que ha quedado acreditada; asimismo, y por estar ante casos idénticos, no se debió considerar que las publicaciones aquí denunciadas constituyen propaganda electoral, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia SUP-REC-887/2018; y finalmente, de conformidad con el principio general de derecho *in poenis benignior est interpretatio facienda*, se debió realizar la interpretación de la norma más benéfica ante la imposición de la pena.

Por lo ya expuesto, de una interpretación sistemática, integral y extensiva del presente caso, y por las circunstancias tan particulares que ya he señalado, estoy convencido que se debió privilegiar la libertad de expresión a partir del vínculo civil existente entre las personas involucradas, lo cual nos ubica en una situación de excepción de responsabilidad a las hipótesis normativas contenidas en los artículos 54, numeral 1, inciso f) de la LGPP, así como 121, numeral 1, inciso j) del RF, por lo que los hechos denunciados no deben considerarse como propaganda electoral y tampoco como aportaciones de ente prohibido susceptibles de sanción para el presente caso.

2) Falta de exhaustividad en el análisis del proyecto.

Es necesario señalar que el análisis contenido en la Resolución recién aprobada, desde mi punto de vista, carece de solidez y exhaustividad interna, ello porque hay partes de dicho documento que adolecen de un desarrollo y/o explicación del contexto bajo el cual se suscitaron los hechos materia de análisis, así como que hay otros apartados en los cuales la motivación resulta insuficiente, para ello me permito señalar lo siguiente:

a) Análisis comparativo de la calidad de influencer entre 2018 y 2021, carente de objetividad y exhaustividad.

Resulta evidente que el apartado A de la Resolución materia del presente, se ocupa de analizar lo relativo a la calidad de influencer de la C. Mariana Rodríguez Cantú que tuvo en los años 2018 y 2021, respecto del cual en su página 128, párrafo segundo, en la Resolución se señala lo siguiente:

(...)



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

“A fin de dotar de mayor claridad sobre lo señalado en el párrafo anterior, **es dable mencionar que pese a que no se tiene el registro de la cantidad de seguidores con los que contaba la C. Mariana Rodríguez en 2018, una forma de comparar su presencia en las redes sociales en ese año y en la actualidad es a través de la cantidad de “likes”** que tiene en fotografías similares. Es por lo anterior que se seleccionaron las fotografías que a continuación se insertan:”

(...)

[Énfasis añadido]

De lo anterior, debo señalar que el análisis vertido en la Resolución resulta carente de parámetros objetivos bajo los cuales esta autoridad cuente con elementos suficientes y necesarios para poder sostener que la popularidad de la multirreferida influencer haya crecido en los últimos años, ello porque únicamente se realiza un análisis de los “likes” registrados en 2 fotografías distintas publicadas en momentos y con un contexto diferente.

Es decir, considero que el análisis hecho respecto del número de “likes” recibidos en distintas publicaciones, no constituye un ejercicio debido y diligente para poder analizar y sostener que el crecimiento profesional de la C. Mariana Rodríguez Cantú, como influencer, se incrementó en los últimos 3 años, ello porque no se retoman parámetros objetivos para ello, como pudo haber sido aquella información que se le hubiera requerido a las propias redes sociales, lo cual no se advierte de la propia Resolución; sin demérito de la posterior argumentación que debía desarrollarse en el sentido que dicho cambio de capacidad de influencia era determinante y generaba ilicitud.

Asimismo, se dejó de analizar y ponderar la situación personal y profesional que guarda la C. Mariana Rodríguez Cantú en torno a su actividad profesional y cómo ello impacta en el desarrollo de su vida diaria, ya que es un hecho público y notorio que actualmente es una mujer que goza de fama ante un sector de la sociedad determinado, y ello no puede ser una limitante en el ejercicio de sus derechos fundamentales, como sucede en el presente caso. Sostener que su empoderamiento mediático debía restringirse llevaría al absurdo de exigir que debía quedarse resguardada, esto es, evitar salir al espacio público en el periodo de campaña precisamente de su esposo.

Ante dicha situación, estimo que en la Resolución se realizó un ejercicio carente de objetividad y exhaustividad, y que la misma merma la certeza que esta autoridad debe brindar en todas sus resoluciones.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

b) Falta de pronunciamiento de las manifestaciones de los denunciados respecto al vínculo jurídico que une al candidato denunciado con la C. Mariana Rodríguez Cantú.

Un aspecto que debe señalarse es el relativo a la falta de exhaustividad de la Resolución en cuanto al análisis y pronunciamiento de las manifestaciones que rindieron los aquí denunciados, específicamente en cuanto al vínculo jurídico que genera el matrimonio y que une al otrora candidato denunciado y la C. Mariana Rodríguez Cantú.

Lo anterior, ya que como puede desprenderse de la lectura de la Resolución que hoy nos ocupa, es claro que a lo largo del documento si bien se retoman en ciertas partes las manifestaciones vertidas por los denunciados, lo cierto es que el proyecto no se ocupa de analizar y señalar con claridad y certeza, por qué las alegaciones de los denunciados no son válidas para desvirtuar los hechos denunciados, es decir, hay un claro punto respecto del cual la autoridad instructora dejó de emitir un pronunciamiento puntual de dichas manifestaciones, lo cual deriva en una clara vulneración al principio de exhaustividad que debe prevalecer en este tipo de procedimientos.

c) Indebida sanción al otrora candidato, falta al principio de imparcialidad.

Otro aspecto que debe señalarse, es el relativo a que en la presente Resolución, y a diferencia de la manera en que ésta autoridad ha venido resolviendo los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización en los cuales se hayan denunciado aportaciones de entes prohibidos, es que en el caso que nos ocupa se determinó no solo sancionar al partido denunciado, sino que también se procedió a imponer una sanción al otrora candidato, lo cual deviene totalmente atípico y genera un trato desigual entre los actores políticos por cuanto respecta a la imposición de sanciones por este tipo de conductas.

Como ejemplo de lo anterior, es de señalar que en la misma sesión del Consejo General del INE de fecha 22 de julio de 2021, se conoció y aprobó el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización identificado con la clave INE/CG1313/2021, incoado en contra de los aquí denunciados por las presuntas aportaciones de entes prohibidos en su beneficio, respecto del cual, las y los integrantes de este Consejo General del INE determinaron, por unanimidad, declarar fundado dicho procedimiento al haberse acreditado aportaciones de entes prohibidos, y respecto del cual únicamente se determinó sancionar al Partido Movimiento Ciudadano, sin que se haya impuesto sanción alguna al otrora candidato.

Para mayor abundamiento, me permito señalar otro ejemplo respecto del cual se puede desprender que esta autoridad, ante casos de aportaciones de entes prohibidos únicamente ha procedido a sancionar al partido político involucrado, esto en la Resolución



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

identificada con la clave INE/CG120/2020, aprobada en fecha 28 de mayo de 2019, en donde únicamente se sancionó al partido MORENA, incoado en ese procedimiento, por haber omitido rechazar aportaciones de entes prohibidos.

Lo anterior, demuestra un proceder atípico de esta autoridad que invariablemente se traduce en un trato disparejo entre los actores políticos.

En suma, del cúmulo de los elementos expuestos, considero que la Resolución recién aprobada nos arroja evidencia de una falta de exhaustividad en cuanto al análisis y pronunciamiento de los elementos que se allegaron al expediente, así como de un actuar atípico en cuanto a la imposición de la sanción, como ya expuse.

3) Contradicción de criterios al interior del INE.

En fecha 2 de mayo de 2018, la Comisión de Fiscalización del INE aprobó, por mayoría de sus integrantes, el Acuerdo identificado como CF/010/2018, por medio del cual dio respuesta a la C. Susana Harp Iturribarría, quien en ese entonces consultó a dicha autoridad si, durante el periodo de campaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018, y dada su calidad de candidata propietaria al Senado de la República postulada por el partido MORENA, así como de cantante, si podría hacer interpretaciones musicales dentro de sus actos de campaña, y que si los mismos representarían algún gasto susceptible de reportarse.

Sobre dicha consulta, la mayoría de las personas integrantes de la Comisión de Fiscalización determinó que las interpretaciones o ejecuciones musicales que realizara durante sus actos de campaña -por ella misma-, no generarían un beneficio susceptible de reportarse y cuantificarse, siempre y cuando no se tuviera como finalidad la de ofrecer un concierto musical, ello con independencia que los gastos asociados a la organización y logística de los eventos sí serían susceptibles de reportarse y fiscalizarse.

Sobre esto último, es de precisarse como un hecho público y notorio que la C. Susana Harp Iturribarría, es una cantante de música tradicional mexicana, y que ha desarrollado su carrera profesional como cantante a lo largo de las últimas 2 décadas, razón por la cual existe la fuerte presunción que su profesión le exige contar con una calidad de persona física con actividad empresarial, lo cual la sitúa en una hipótesis similar al caso que nos ocupa.

Ahora bien, es de llamar la atención que una parte de los integrantes de este Consejo General del INE, haya considerado y determinado recientemente que la C. Susana Harp Iturribarría, quien tenía como principal profesional el ser cantante de música tradicional, podría válidamente interpretar canciones en sus propios actos de campaña, sin que ello se considerara contrario a la prohibición normativa relativa a que las personas morales no puede realizar aportaciones a los partidos políticos o sus candidatos, como lo disponen los artículos



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

54, numeral 1, inciso f) de la LGPP, así como en el artículo 121, numeral 1, inciso j) del RF, y que para el presente caso, sostengan consideraciones diametralmente opuestas a las señaladas.

Cabe precisar que no pasa desapercibido para el suscrito que si bien no se trata de casos idénticos y que los mismos guardan diferencias entre sí, lo cierto es que si uno parte de la esencia de dicha determinación, es válido considerar que en el caso que nos ocupa, las aportaciones realizadas por la C. Mariana Rodríguez Cantú a la campaña de su esposo, el otrora candidato Samuel Alejandro García Sepúlveda, deben ser consideradas como provenientes de un ámbito muy cercano al propio denunciado, ello porque como ya lo he señalado a lo largo del presente documento, dichas personas se encuentran unidas jurídicamente por la figura del matrimonio, la cual resulta de medular importancia para el presente caso.

Un aspecto que debo dejar muy claro es que en el caso que nos ocupa, y respecto del cual considero jurídicamente viables tales “aportaciones”, es que las mismas se traducen en **servicios que derivan del talento e imagen de la C. Mariana Rodríguez Cantú, lo que es esperable dada su actividad profesional, y no así de productos o servicios materiales que pudieran desprenderse de alguna otra actividad empresarial.**

Por todo lo anterior, y de una interpretación sistemática, integral y extensiva de la normatividad aplicable al presente caso, estoy convencido que es jurídicamente viable considerar la existencia de un régimen de excepción a las aportaciones de entes prohibidos, ello únicamente cuando se surtan las particularidades que se actualizan en el presente caso, como lo es la existencia de un vínculo de unión o parentesco entre los involucrados, ya que no es esperable ni exigible otra conducta más que las desplegadas por el denunciado y la C. Mariana Rodríguez Cantú, aunado a lo cual la Sala Superior ya determinó en un caso idéntico, que la conducta desplegada por la C. Mariana Rodríguez Cantú se encontraba amparada por la libertad de expresión, por lo cual, considero que el presente caso se debió declarar infundado, y por ende, no imponer sanción alguna, razones por las cuales, no puedo acompañar el sentido propuesto.

Por las razones expuestas, de manera respetuosa, emito el presente **VOTO PARTICULAR.**

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL

